

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO
ACCIONADO: U.A.R.I.V.
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00333 00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

FALLO DE ACCIÓN DE TUTELA							
FECHA	VEINTISEIS (26 DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)						
RADICADO	05001	31	05	017	2021	00333	00
PROCESO	TUTELA N°.99 de 2021						
ACCIONANTE	OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO						
ACCIONADA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS						
PROVIDENCIA	SENTENCIA No.268 de 2021						
TEMAS	PETICION, DIGNIDAD, BUENA FE IGUALDAD, entre otros						
DECISIÓN	NO TUTELA DERECHOS						

La señora OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía No.21.461.901, actuando en nombre propio, presentó en este Despacho judicial acción de tutela en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por considerar vulnerados los derechos fundamentales, PETICION, DIGNIDAD, IGUALDAD, entre otros que en su sentir, le han sido conculcados por dicha entidad.

Pretende la señora OLGA PATRICIA DE LA AUXILAIIDORA RAMIREZ OSORIO, que realice de manera inmediata la respectiva valoración del caso y que emita la correspondiente resolución donde le incluyan en el RUV por el hecho victimizante sufrido.

Para fundar la anterior pretensión, afirma que tiene 62 años, que rindió declaración de los hechos victimizantes el 22 de septiembre de 2014 en la personería de Municipio de Andes, por el cual solicitó el reconocimiento de la calidad víctima por el hecho de victimizante de secuestro, por los hechos ocurridos el 1° de agosto de 1986 en el Municipio de Andes (Antioquia).

Que la declaración de los hechos victimizantes fue valorada por la UARIV por cuanto solicitó el reconocimiento de la calidad de víctima y mediante resolución 2015-915 del 5 de enero de 2015, se decidió no incluirlo en el Registro Único de Víctimas RUV y no reconocer el hecho de victimizante de secuestro, decisión que vulnera los derechos como víctimas de conocer la verdad, obtener pronta justicia ser reparada integralmente por los hechos ocurridos.

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO
ACCIONADO: U.A.R.I.V.
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00333 00

Que debido a la negativa de a UARIV interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación y mediante Resolución 2015-915 R del 1° de septiembre de 2015 la entidad accionada mantuvo la postura diciendo no reponer la decisión inicial y mediante resolución N°,11689 del 29 de febreros de 20216, desatando el recurso de apelación la UARIV confirmó la Resolución 2015-915 negándole el reconocimiento de lo peticionado, que interpuso solicitud de revocatoria directa contra el acto administrativo de negación de reconocimiento de la calidad de víctima y la decisión tomada, resultado contrario a los intereses de ella.

Que el secuestro se realizó por el grupo armado organizado al margen de la ley EPL y que varios de los compañeros, empelados del entonces banco cafetero, SI fueron incluidos en el RUV por los mismos hechos como Ana Silvia zapata Tamayo, Fabio león Saldarriaga Elorza, Matilde de Jesús cañaverl Orozco Fernando Antonio Díaz, que en el día de los hechos se encontraban en el mismo lugar, que lo único diferente es que ellos fueron incluidos entre otros muchos y que la accionante no.

Con fundamento en lo anterior, hace las siguientes,

PRUEBAS:

La parte accionante anexa con su escrito:

-La accionante, allegó Resolución N°2015-915, Resolución N°2015-915R, Resolución N°11689, respuestas la accionada y copia de la cédula de ciudadanía del accionante. (fls. 11/44).

TRÁMITE Y RÉPLICA

La presente acción se admite en fecha del 22 de julio de este año, ordenándose la notificación al Director General de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, doctor ENRIQUE ARDILA FRANCO, enterándolos que tenían el término de DOS (2) días para pronunciarse al respecto, e igualmente ordenando imprimirle el trámite establecido para esta clase de acciones.

A folios 47/51, reposa la notificación a la entidad accionada, mediante correo electrónico. Notificada la acción de tutela conforme las previsiones de los

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO
ACCIONADO: U.A.R.I.V.
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00333 00

Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, se le concedió un término de DOS (02) días a las accionadas para rendir los informes del caso.

La entidad accionada UARIV, a folios 52/76 da respuesta a la acción de tutela manifestando que:

“...Mediante solicitud en el Registro Único de víctimas por el hecho victimizante de SECUESTRO, nos permitimos informarle que la misma fue resuelta mediante Resolución N°.2015-915 del 5 de enero de 2015, notificada de manera personal el 03 de agosto de 2015, resolviendo NO INCLUIR a la accionante en el Registro de Víctimas por el hecho victimizante de secuestro, que contra la resolución interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, por los que esta entidad resolvió el recurso de reposición, mediante Resolución N°.2015-915 de 1° de septiembre de 2015, notificada de manera personal el 03 de octubre de 2015, el recurso de apelación fue resuelto mediante resolución N°.11689 de 29 de febrero de 2016, notificada de manera personal el 25 de noviembre de 2016, decidiendo en ambas instancias CONFIRMAR a decisión proferida mediante Resolución N°.2015-915 del 5 de enero de 2015.

Posteriormente, el accionante interpuso Revocatoria directa en contra de la decisión anterior, por lo que esta entidad mediante oficio de fecha 14 de diciembre de 2017, informó la improcedencia de la Revocatoria interpuesta, porque no procede la solicitud de inclusión en el Registro único de víctimas por el hecho victimizante de SECUESTRO...”

Por lo que precluidos todos los términos, sin otro que agotar, lo procedente es decidir de fondo, lo que se hará con fundamento en las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Artículo 86 de la Carta Magna que nos rige, desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y el Reglamentario 306 de 1992, establece como un mecanismo breve y sumario para el amparo de los derechos fundamentales de rango constitucional, la ACCIÓN DE TUTELA.

Mecanismo preferente y prevalente que puede instaurar cualquier persona cuando quiera que tales derechos resulten amenazados o conculcados por cualquier autoridad pública o en determinadas circunstancias por un particular y, el cual por el mismo mandato constitucional y legal, impone a los jueces de la República dar una pronta decisión pues se funda en los principios de sumariedad y celeridad en razón de los derechos que presuntamente están siendo amenazados o conculcados.

Así mismo, se ha determinado y ha sido pronunciamiento de la jurisprudencia constitucional que se trata de un trámite o medio de defensa de carácter residual y subsidiario, o sea cuando no haya otro medio de defensa judicial, pero para que

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO
ACCIONADO: U.A.R.I.V.
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00333 00

la tutela sea improcedente indispensable es que el otro mecanismo sea idóneo y eficaz, con el objetivo de lograr la finalidad específica de brindar de manera plena e inmediata la protección de los derechos amenazados o violados.

La legitimación para instaurar esta acción la establece el Artículo 10 del Decreto 2591, estableciendo que esta puede hacerla cualquier persona en su propio nombre y en defensa de sus derechos, o por Representante, enseñando que los poderes otorgados para tal fin se presumirán auténticos, también puede hacerlo un tercero cuando quiera que el afectado no pueda asumir la defensa de sus derechos (agencia oficiosa), legitimación que también radica en cabeza del Defensor del Pueblo y en los personeros municipales.

A su vez, expresa el canon 13 de ese Decreto que la acción podrá instaurarse contra la autoridad pública y, excepcionalmente contra el particular, que amenace o desconozca el derecho cuya protección se busca.

En este caso en concreto, quien instaura la acción es a quien presuntamente está desconociendo o amenazando los derechos que presuntamente invoca como violados y, lo hace contra un organismo del sector descentralizado por servicios del orden nacional, de ahí que la legitimación por activa y pasiva está debidamente acreditada por activa y pasiva.

El Artículo 37 del plurimencionado Decreto 2591, ha determinado la competencia para conocer de esta clase de acciones, a prevención, en los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde presuntamente se esté vulnerando o amenazando el derecho cuya tutela se pide.

Al respecto, claro es que el accionante actualmente y, a raíz de la particular situación que le obligara a desplazarse a esta ciudad, busca ante el organismo que legalmente corresponde la protección de los derechos fundamentales de las personas que como ella integran la llamada población desplazada en nuestro país, por lo que posible es sostener que sus derechos le están siendo afectados es en esta ciudad.

Ahora bien, en la respuesta que hace la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, manifiesta que:

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO
ACCIONADO: U.A.R.I.V.
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00333 00

“...Mediante solicitud en el Registro Único de víctimas por el hecho victimizante de SECUESTRO, nos permitimos informarle que la misma fue resuelta mediante Resolución N°.2015-915 del 5 de enero de 2015, notificada de manera personal el 03 de agosto de 2015, resolviendo NO INCLUIR a la accionante en el Registro de Víctimas por el hecho victimizante de secuestro, que contra la resolución interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, por los que esta entidad resolvió el recurso de reposición, mediante Resolución N°.2015-915 de 1° de septiembre de 2015, notificada de manera personal el 03 de octubre de 2015, el recurso de apelación fue resuelto mediante resolución N°.11689 de 29 de febrero de 2016, notificada de manera personal el 25 de noviembre de 2016, decidiendo en ambas instancias CONFIRMAR a decisión proferida mediante Resolución N°.2015-915 del 5 de enero de 2015.

Posteriormente, el accionante interpuso Revocatoria directa en contra de la decisión anterior, por lo que esta entidad mediante oficio de fecha 14 de diciembre de 2017, informó la improcedencia de la Revocatoria interpuesta, porque no procede la solicitud de inclusión en el Registro único de víctimas por el hecho victimizante de SECUESTRO...”

Por lo hechos narrados y en relación con el derecho de petición elevado por la señora OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía No.21.461.901, esta Juez constitucional considera que la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, resolvió oportunamente y de fondo la petición y por ello la violación que la accionante alega haber sufrido se encuentra configurada como un HECHO SUPERADO.

La Corte Constitucional, refiere la situación del hecho superado, de la siguiente forma:

“La doctrina constitucional ha sostenido, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1.991, que el objetivo fundamental de la acción de tutela no es otro que la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad o de un particular en los casos expresamente señalados en la ley.

Así las cosas, la eficacia de la acción de tutela reside en el deber que tiene el juez, si encuentra vulnerado o amenazado el derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.

Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la violación o amenaza ya ha sido superada, es decir, la pretensión instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el instrumento constitucional – acción de tutela- pierde eficacia y por tanto, su razón de ser. En estas condiciones, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener y el proceso carecería de objeto, resultando improcedente la tutela; efectivamente, desaparece el supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución Política – la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.”- Cfr. Sent. De la Corte Constitucional T-558 de octubre 6 de 1.998, la misma que se ha venido ratificando en casos como el que se decide”.

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO
ACCIONADO: U.A.R.I.V.
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00333 00

Así las cosas, habrá de denegarse el amparo solicitado con respecto al derecho de petición, por carecer la presente acción de objeto, al haber cesado la situación que estaba dando origen a la vulneración del derecho de la accionante.

En consecuencia, no se accederá a dicha solicitud, toda vez que la entidad accionada dio respuesta oportuna a la solicitud formulada por la accionante, lo cual hace prever que no hay derecho fundamental que se encuentre amenazado y mal haría este despacho en proteger a través de una acción como la que nos convoca, derechos fundamentales sin que exista prueba de su violación.

Esta sentencia se notificará a las partes conforme lo establece el Artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Si la presente providencia no fuere impugnada dentro del término de tres (3) días señalados en el Artículo 31 del Decreto 2561 de 1991, por la Secretaría se enviarán las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Por lo expuesto, el **JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO. DENIEGASE la solicitud de tutela formulada por la señora OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía No.21.461.9017, en contra de la UNIDAD DE VICTIMAS PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LA VICTIMAS por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más ágil y expedito, de no lograrse personalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 306 de 1992, y en armonía con el Artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si la presente providencia no es impugnada, remítase a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: OLGA PATRICIA DE LA AUXILIADORA RAMIREZ OSORIO
ACCIONADO: U.A.R.I.V.
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00333 00

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



GIMENA MARCELA LOPERA RESTREPO

JUEZ

Firmado Por:

GIMENA MARCELA LOPERA RESTREPO

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 017 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

38fe379a372ae658f48c62794d16982be1895f95070b0085c43faa0dc418c7fc

Documento generado en 26/07/2021 02:43:15 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>